

Luis Fernández Gamazo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla y León

“La situación que vivimos hoy es crítica, equivalente a la época de la reconversión industrial”

Ingresó en Comisiones Obreras a finales de los años 80 en el Transporte. Actualmente es funcionario de Policía del Ayuntamiento de Valladolid, donde fue responsable de la Sección Sindical. Posteriormente accedió a la secretaría general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Castilla y León y de ahí a la actual Federación de Servicios a la Ciudadanía, una de las organizaciones con mayor afiliación de la Unión Sindical.

¿Por qué esta unión de dos federaciones históricas en Comisiones Obreras, la federación de Transportes y Comunicaciones y la de Servicios y Administraciones Públicas?

La fusión, acometida en marzo de 2009, fue una decisión un tanto controvertida en cuanto a su oportunidad, pero el planteamiento de sus promotores de fusión partía de la necesidad de dar una mejor respuesta sindical y organizativa a la nueva y compleja realidad de los servicios y empresas públicas y de aquellos que no siéndolo tienen como principal objeto el servicio a la ciudadanía. Por otra parte debía permitir simplificar la estructura sindical poniendo en común los recursos humanos y económicos y aportando una visión más solidaria.

El balance en este tiempo ¿ha sido positivo?

Aún es pronto para hacer un balance en esos términos, pero nuestra experiencia en Castilla y León lo está siendo, a pesar de las lógicas dificultades de “crear” una organización de estas características, tan compleja, tan grande. Nosotros, aquí, establecimos una serie de compromisos y objetivos para estos primeros cuatro años que se van desarrollando a buen ritmo, fundamentalmente lo relacionado con la gestión eficaz de nuestros recursos económicos y humanos y su puesta a disposición de la actividad sindical en las empresas y en los centros de trabajo que es el objetivo principal de la Federación. Aunque trabajamos en buena dirección se necesita tiempo para consolidar una cultura organizativa propia que responda adecuadamente a la complejidad de la nueva Federación.

¿De qué servicios estamos hablando?

La Federación de Servicios a la Ciudadanía acoge en su seno buena parte de las personas que trabajan en las administraciones públicas (excluida Sanidad y Enseñanza) así como aquellas empresas públicas y privadas que prestan servicios a la ciudadanía, por ejemplo, medios de comunicación, correos, telecomunicaciones, RENFE, ADIF, AENA, la ONCE, empresas de intervención social, transporte público, ambulancias..., junto con otras de marcado carácter privado como transporte de mercancías, Papel y Artes Gráficas...

¿Estamos hablando de la Federación más fuerte dentro del sindicato?

Desde luego es la más numerosa, cuenta con más de 1.200 delegados y delegadas, aporta el 20% de la afiliación de todo el sindicato, no solo en Castilla y León sino también a nivel confederal, y tiene 13.000 afiliados en Castilla y León y 250.000 a nivel nacional.

¿Cómo valora la situación actual de crisis económica en la que los empleados públicos han visto rebajado su salario por primera vez en la historia?

El conjunto del país atraviesa una muy difícil situación, los trabajadores y también la ciudadanía, posiblemente uno de los momentos más duros desde la dictadura y equivalente, probablemente, a la dureza de la reconversión industrial y la posterior crisis de los años 90. En ese contexto, también los servicios públicos y las personas que trabajan en ellos se han visto afectados, el recorte salarial es un ejemplo, la pérdida de empleo público también. Con todo, desde la perspectiva de los servicios públicos, y esto es lo más grave de todo, nos encontramos ante un intento serio de desmantelamiento del incipiente Estado del Bienestar, de puesta en manos privadas, es decir en manos de unos pocos, de servicios que deben seguir siendo públicos. Asistimos a una devaluación de los



Luis Fernández Gamazo durante el transcurso de la entrevista. Víctor Otero.

servicios públicos sin precedentes y no casual. Nosotros como trabajadores, públicos o privados, como ciudadanos, sabemos, porque lo tenemos reciente en nuestras vidas, lo que supone vivir en barrios, en ciudades, en pueblos sin servicios públicos, eso es lo que realmente está en juego en esta estrategia contra los servicios públicos y con políticas que hacen excesivo hincapié en la reducción del gasto y muy poco o nada en la política de ingresos.

¿Cómo cree usted que han respondido los sindicatos?

El sindicato advirtió, antes que nadie, la debilidad de nuestro modelo productivo y las graves consecuencias que provocaría su desplome, sobre todo para las personas en ese sentido. Creo que Comisiones Obreras se ha situado en el lado correcto, que es en la defensa de una salida social a la crisis, en defensa del mantenimiento del Estado de Bienestar y de los servicios públicos y en defensa de los intereses de los trabajadores. Por esa razón nos hemos convertido en objeto a batir por parte de aquellos que entienden un estorbo organizaciones autónomas como la nuestra que representan, con errores y aciertos en nuestra estrategia, el último freno a estas políticas contra los trabajadores y contra el modelo de Estado Social que defendemos, solo así se entienden los ataques que venimos recibiendo.

¿Y cómo cree que han respondido los trabajadores del sector público ante estas agresiones?

Pues si he de ser sincero, no han respondido en la medida que nos hubiera gustado. La huelga de junio de 2010 en el sector público hubiera merecido un seguimiento mucho más contundente. Los que trabajamos en la administración no nos sorprende porque sabemos que, en general, no es un colectivo que se caracterice por su dinamismo en las movilizaciones. Quizá no acertamos en la estrategia, pero en cualquier caso hubiera merecido una respuesta más amplia, acorde con la dureza del Decreto del Gobierno.

¿Debemos estar preparados para una nueva rebaja después de las elecciones?

Espero que no, sobre todo a la vista de la ineficacia de la medida. Además estamos pendientes del recurso de inconstitucionalidad del decreto que rebajaba el salario de los

Eso no impide que vengamos demandando una implicación más activa, por parte del Gobierno de la Junta, en acometer los graves déficits que presenta nuestra Comunidad en infraestructuras, política industrial, empleo...

¿Cómo son esas relaciones con la administración autonómica?

Depende. No siempre son relaciones óptimas. Hemos sentado las bases para acometer procesos de negociación, con importantes acuerdos, pero la actual situación de crisis está siendo aprovechada, a veces sin justificación real, para incumplirlos o ralentizarlos, es el caso del convenio colectivo del personal laboral. Por otro lado, la Junta de Castilla y León desarrolla una política de externalización de servicios y de creación de un magma de entidades, fundaciones y empresas públicas que dificultan el control público, debilita la prestación de los servicios públicos y deteriora las condiciones del empleo.

¿Y con el resto de las administraciones?

Tras las elecciones y con los gobiernos municipales que resulten tenemos que acometer problemas acuciantes como por ejemplo la elevada temporalidad, la ausencia de convenios en muchos de ellos, y la propia situación, ahora mucho más grave, de la financiación municipal. En este sentido la FSC-CCOO ha hecho un trabajo importante en este periodo y hemos conseguido firmar un Acuerdo Marco con la Federación Regional de Municipios y Provincias para dar cobertura en materia de negociación colectiva que tiene como principal destinatario a todos los pequeños ayuntamientos que carecen de convenio colectivo dotándoles de un marco mínimo de condiciones socio-laborales homogéneo para todos los que se adhieran al mismo.

Y ¿cuáles son las perspectivas para el resto de los trabajadores de los otros sectores de su Federación?

Lamentablemente las cifras del desempleo ya sabemos todos cuáles son, estamos al borde de los 5 millones de parados. En nuestro ámbito concreto actualmente estamos sufriendo graves problemas en el sector de medios de comunicación, con ajustes importantes en las editoras más importantes y diariamente asistimos al adelgazamiento de plantillas en las empresas. Una situación especialmente dolorosa fue la que vivió la papelera de Rottneros, en Miranda de Ebro, donde se desmanteló una empresa rentable dejando a todos los trabajadores en la calle y con la consiguiente repercusión social para toda la zona de Miranda. Ese fue un episodio triste y lamentablemente el prelude de todo lo que vendría después. En este caso seguimos trabajando desde la Federación para dar una salida laboral a los trabajadores que vieron como desaparecía su empresa. Estamos asistiendo a tiempos verdaderamente difíciles y no vemos que las soluciones aportadas por el Gobierno, como la reforma laboral, vayan en la dirección correcta de salida de la crisis, que no es otra que poner a las personas en el centro de las decisiones políticas y sociales, en detrimento de los intereses de los mercados.